



[Versión imprimible](#) | [Suscripción gratuita](#) | [Números anteriores](#)

también disponible en [francés](#), [potugués](#) e [inglés](#)

Número 125 - Diciembre 2007

NUESTRA OPINIÓN

- [El engaño del carbono-neutro](#)

CAMBIO CLIMÁTICO

- [Se crea una coalición para intensificar las acciones destinadas a impedir el cambio climático y responder al mismo](#)
- [Género y cambio climático](#)
- [La industria del papel y el "negocio del cambio climático"](#)
- [Por qué las plantaciones como sumideros de carbono prácticamente no han sido instrumentadas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto... hasta ahora](#)

COMUNIDADES Y BOSQUES

- [Criminalizados por Defender la Naturaleza](#)
- [India: instrumentación de la ley de 2006 de derechos de los indígenas sobre los bosques](#)
- [Mekong: la Comisión internacional hace los controles equivocados](#)
- [La Ley sobre Bosques Comunitarios de Tailandia: ¿para quién piensa el gobierno militar que es buena?](#)

COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- [Chile: lo que no se dice del trabajo forestal](#)
- [Chile: el nulo valor del sello CERTFOR en plantaciones de árboles](#)
- [Papua New Guinea: Los isleños de Woodlark exigen que se detengan las plantaciones de palma aceitera](#)
- [Swazilandia: Woodmark y SAPPI ignoran las enseñanzas de un agricultor vecino](#)
- [Unión Europea y agrocombustibles: la insostenibilidad de lo "sostenible"](#)

NUESTRA OPINIÓN

- El engaño del carbono-neutro

Parece que ser "carbono-neutro" se puso de moda. El Banco Mundial, el Vaticano, los Juegos Olímpicos, el Mundial de fútbol, la cadena de tiendas The Body Shop, los Rolling Stones y una larga lista de famosos se proclaman total o parcialmente "carbono-neutros". Hasta Mercedes Benz organizó recientemente en California lo

que se describió como “la primera semana de la moda carbono-neutro del mundo”. Por lo tanto es comprensible que un diccionario, el New Oxford American Dictionary, haya elegido a “carbono-neutro” como su Palabra del Año para 2006.

Hay que reconocer que ser “carbono-neutro” suena bien y que algunos de los mencionados creen honestamente estar haciendo lo correcto, porque da la impresión de que “neutro” significa no emitir nada. Sin embargo el concepto esconde un peligroso juego de engaño en el que muchos jugadores corporativos están ganando mientras el clima de la Tierra pierde.

Quizás la mejor manera de “neutralizar” este absurdo sea a través del ridículo. Eso hizo la gente que creó el sitio Cheatneutral (“engaño-neutro”) en internet. Inventaron, siguiendo los pasos de los inventores de la compensación del carbono, el concepto de “compensación del engaño”. Cheatneutral, declaran, “compensa sus engaños financiando a otra persona para que sea fiel y NO engañe. Esto neutraliza el dolor y la infelicidad para que Ud. quede con la conciencia limpia”.

Pretender “neutralizar” las emisiones de carbono es igualmente ridículo. Los vuelos carbono-neutros son quizás la mejor forma de demostrar que esto es una estafa. Los aviones no vuelan con combustibles renovables sino con petróleo. Una vez que entra en combustión para permitir que los aviones vuelen, el carbono contenido en el combustible se libera a la atmósfera para no volver jamás a su lugar original bajo tierra. Este carbono nunca puede neutralizarse; se sumará a la creciente cantidad de carbono atmosférico que está destruyendo el clima del planeta.

A pesar de ello, los muy imaginativos comerciantes del carbono han inventado una forma de ganar dinero con esto. Si las personas no quieren sentirse culpables o las empresas desean promocionarse como “amigas del clima”, hay cada vez más empresas deseosas de brindarles, a cambio de una suma de dinero, una solución.

Por ejemplo, la británica Carbon Neutral Company dice que “Debido al carbono emitido, volar es una de las causas del cambio climático que crece con mayor rapidez”. Sin embargo, a cualquiera que pueda preocuparse por eso se le garantiza inmediatamente que es posible “Neutralizar sus emisiones de carbono con nuestros Vuelos Carbono-Neutros y hacer que su viaje sea más ecológico”. Según la distancia del vuelo, “neutralizarlo” cuesta entre £4.50 y £52.50. Además de librarlos del sentimiento de culpa, la empresa también brinda a sus compradores un “certificado con una dedicatoria personal si Ud. así lo desea”, un “mapa en colores e información sobre 'sus' proyectos”, una “etiqueta de viaje de cuero reciclado” y una “carpeta de color crema, atada con una cinta” (¡esto no es broma, está en el sitio de Carbon Neutral!).

Se han creado muchas otras empresas para beneficiarse con la compensación del carbono. TerraPass, Native Energy, DriveNeutral, Climate Friendly, AtmosFair, Climate Care y GreenSeat son algunos ejemplos de las empresas, que cada vez son más, que ofrecen tales servicios.

Los medios que usan estas empresas para “compensar” son diversos y van desde lamparitas eléctricas eficientes hasta la plantación de árboles. Dentro de este juego del engaño, es esto último lo que más nos preocupa. Un informe reciente (State of

the Voluntary Carbon Market 2007) explica que algunos proyectos son más “carismáticos” que otros y añade que “Los árboles son un aspecto de la captura del carbono que todo el mundo entiende, hasta los niños pequeños lo entienden... la gente capta la idea”.

A pesar de su “carisma”, los árboles han demostrado ser problemáticos y esto llevó a algunas instituciones a favor del carbono-neutro a desvincularse públicamente de dichos planes: “Debido a los muchos problemas que tienen los proyectos de plantación de árboles, la Fundación David Suzuki solamente compra compensaciones a proyectos de energía eficiente o renovable”. The Body Shop explica que “En 2006 compensamos nuestro negocio de transporte aéreo... financiando proyectos que no implicaran la plantación de árboles”. La empresa Cleaner Climate Company, que brinda servicios de compensación de carbono a Adobe, explica que “no planta árboles” porque “la ciencia que respalda la captura del carbono no es suficientemente precisa” y porque se ha comprometido “a tener un impacto positivo en las comunidades locales”, dando a entender que las plantaciones tienen un impacto negativo.

Esta inquietud acerca de las compensaciones relacionadas con la plantación de árboles no ha surgido por casualidad. Es el resultado de años de campañas contra los monocultivos en gran escala y de la documentación de sus impactos y de las luchas en su contra. Además, se han investigado y expuesto ampliamente algunos casos especialmente negativos de plantaciones para compensar carbono (como los de la fundación holandesa FACE en Uganda y Ecuador), obligando a las empresas de comercialización de carbono a procurar inversiones menos riesgosas.

Esta creciente inquietud sobre las plantaciones es una muy buena noticia para las comunidades locales que podrían haber sufrido los impactos de las plantaciones para compensar carbono. Sin embargo, implica que el floreciente mercado del carbono simplemente se está mudando a otras zonas más “carismáticas”. Esta estafa tiene que salir a la luz. La gente tiene que entender que ser “carbono-neutro” tiene exactamente el mismo valor que ser “engaño-neutro”, es decir ninguno, y que se necesita urgentemente actuar de verdad en escala mundial para reducir drásticamente las emisiones de los combustibles fósiles, sin engaños.

[inicio](#)

CAMBIO CLIMÁTICO

- Se crea una coalición para intensificar las acciones destinadas a impedir el cambio climático y responder al mismo

Durante la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Bali, Indonesia, en diciembre de 2007, varios grupos y movimientos sociales acordaron establecer una coalición llamada Climate Justice Now! (¡Justicia Climática Ahora!) para mejorar el intercambio de información y la cooperación entre sí y con otros grupos con el fin de intensificar las acciones para impedir el cambio climático y poder responder al mismo.

Entre los miembros de la coalición se cuentan Carbon Trade Watch, Transnational Institute, Center for Environmental Concerns, Focus on the Global South, Freedom from Debt Coalition (Filipinas), Amigos de la Tierra Internacional, gender cc - mujeres por la justicia climática, Coalición Mundial por los Bosques, Global Justice Ecology Project, International Forum on Globalization, Kalikasan-Peoples Network for the Environment (Kalikasan-PNE), La Vía Campesina, integrantes del Grupo de Durban por la Justicia Climática, Oilwatch, Coalición de los Pueblos Indígenas del Pacífico por el Medio Ambiente (Aotearoa/Nueva Zelanda), Sustainable Energy and Economy Network, Red Ambiental Indígena, Red del Tercer Mundo, WALHI/ Amigos de la Tierra Indonesia, Movimiento Mundial por los Bosques.

El 14 de diciembre la coalición emitió la siguiente declaración:

“Durante la Conferencia sobre el Clima de la ONU, activistas de organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo llevaron la lucha por la justicia social, ecológica y de género a las salas de negociaciones y a las calles de Bali.

Tanto dentro como fuera del centro de convenciones, los activistas reivindicaron políticas y prácticas que protejan los medios de vida y el entorno.

En decenas de actos paralelos, informes, protestas espontáneas y ruedas de prensa se han presentado las falsas soluciones al cambio climático, como la compensación de emisiones, el comercio de emisiones para los bosques, los agrocombustibles, la liberalización comercial y la privatización, defendidas por gobiernos, organismos financieros y empresas multinacionales.

Las comunidades afectadas, pueblos indígenas, mujeres y campesinos exigieron soluciones reales a la crisis climática, soluciones que no han captado la atención de los dirigentes políticos. Entre estas verdaderas soluciones, cabe destacar:

- * reducción del consumo.
- * importantes transferencias económicas del Norte al Sur "por su responsabilidad histórica y deuda ecológica" para pagar los costes de adaptación y mitigación, transferencias que se obtendrían desviando los presupuestos militares, con nuevos impuestos y con la cancelación de la deuda.
- * dejar los combustibles fósiles bajo tierra e invertir en la eficiencia energética y en energías renovables, seguras, limpias y dirigidas por las comunidades.
- * una conservación de los recursos que se base en los derechos, que haga valer los derechos territoriales indígenas y promueva la soberanía popular sobre la energía, los bosques, la tierra y el agua.
- * agricultura familiar sostenible y soberanía alimentaria de los pueblos.

En las negociaciones, los países ricos e industrializados han ejercido una presión injustificable sobre los gobiernos del Sur para que se comprometan a reducir sus emisiones. Al mismo tiempo se han negado a cumplir con sus obligaciones legales y morales de reducir drásticamente las emisiones y respaldar las iniciativas de los países en desarrollo para reducir las emisiones y adaptarse a los impactos climáticos. De nuevo, se está obligando a la mayoría del mundo a pagar por los excesos de la minoría.

Comparado con los resultados de las negociaciones oficiales, el principal éxito de Bali está en el impulso que se ha generado en torno al movimiento mundial por la justicia climática.

Y seguiremos con nuestra lucha no sólo en las negociaciones, sino también sobre el terreno y en las calles: ¡justicia climática ya!”

[inicio](#)

- Género y cambio climático

Por primera vez en la historia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, una coalición mundial de mujeres redactó documentos de posición con la perspectiva de género y de las mujeres sobre los asuntos más acuciantes negociados en la conferencia celebrada en Bali, Indonesia, entre el 3 y el 14 de diciembre. Gender and Climate Change (gender cc), la alianza mundial de mujeres sobre género y cambio climático, presentó sus documentos de posición en una conferencia de prensa realizada durante la convención y distribuyó cientos de ejemplares a los delegados gubernamentales.

Una de las declaraciones más importantes de dichos documentos es que “Las mujeres son las más afectadas por el cambio climático, pero también catalizadores clave para un cambio positivo. Su conocimiento y su experiencia son fundamentales para el éxito en la mitigación del cambio climático, así como para la adaptación al mismo”.

Exigieron “un futuro régimen climático diseñado en un marco de igualdad de género y directrices de sustentabilidad en lugar de uno impulsado por los factores económicos dominantes. Para mitigar el cambio climático hay que encarar sus causas profundas de una manera más medular”.

Exigieron también el “reconocimiento de la contribución de las mujeres a la conservación de los bosques. Las mujeres deberían estar incluidas en todo mecanismo de protección de los bosques, medidas y planes de compensación. El comercio del carbono, los grandes proyectos hídricos y la expansión de los agrocombustibles no son la solución al cambio climático sino que más bien aumentan la deforestación”.

Ulrike Roehr, que actuó como coordinadora de la red gender cc, declaró: “Necesitamos cuestionar la perspectiva dominante que se centra principalmente en la tecnología y los mercados y poner la justicia y el cuidado en el corazón de las medidas y los mecanismos”. Roehr subrayó que “la falta de perspectivas de género en el actual proceso del clima no solamente viola los derechos humanos de las mujeres, principios fundamentales acordados por la comunidad de Naciones Unidas, sino que también lleva a deficiencias en la efectividad y la eficiencia de las medidas y los instrumentos relacionados con el clima”.

El último día de la conferencia, la red gender cc llevó al Plenario una fuerte presentación donde declara: "Exhortamos a ustedes, nuestros gobiernos, a garantizar cortes drásticos de las emisiones desde su fuente. Ustedes tienen el poder de hacer esto aquí y ahora. Las personas amenazadas por el cambio climático no pueden esperar".

Al mismo tiempo, en una declaración presentada conjuntamente con MADRE (ver en inglés: http://www.wrm.org.uy/actors/CCC/Bali/Women_Agrofuels.pdf), ambas organizaciones rechazaron los agrocombustibles como fórmula válida de reducción de emisiones de carbono y exhortaron a todas las partes interesadas, entre otras cosas, a apoyar la propuesta del relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, de aplicar una moratoria de cinco años a la producción de agrocombustibles, que al ocupar cada vez más tierras de cultivo contribuyen a aumentar el hambre en el mundo.

Por más información sobre la red gender cc, sírvase comunicarse con Ulrike Roehr, gender cc - mujeres por la justicia climática, roehr@life-online.de, www.gendercc.net inicio

- La industria del papel y el "negocio del cambio climático"

Durante muchos años la industria de la pulpa y el papel ha intentado pintarse de verde. Ningún desafío es demasiado grande, parece, para una de las industrias más contaminantes del planeta. Aunque la producción de papel es una importante consumidora de energía y una de las causas principales de las emisiones de gases de efecto invernadero, el último reto para esta industria es volverse "carbono-neutra". Mientras que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero puede sonar como algo que todos recibiríamos con agrado, esta discusión dominada por la industria deja de lado el hecho de que la industria de la pulpa y el papel se está expandiendo con rapidez, sobre todo en el Sur global. Ignora también el tema del masivo exceso de consumo de papel en el Norte. La mejor forma de reducir el impacto de la industria de la pulpa y el papel es reduciendo la cantidad de papel que se produce. Pero por supuesto que a la industria del papel no le interesa hablar de esto.

En octubre de 2007, la Asociación de Productos Forestales de Canadá (Forest Products Association of Canada, FPAC) anunció que para 2015 se convertiría en la primera industria "carbono-neutra" de Canadá. El anuncio se hizo durante una conferencia celebrada en un lujoso hotel de cinco estrellas en el centro de Ottawa. Los discursos de Keith Trent (de Duke Energy) y Clive Mather, director ejecutivo de Shell Canadá, fueron la piedra angular de esta conferencia que llevó por título, por cierto muy apropiado, "Conferencia sobre el negocio del Cambio Climático".

La FPAC ha entrado en sociedad con el WWF para "ayudar a guiar la iniciativa". La FPAC declara ya haber reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 44% entre 1990 y 2004. Pero esta cifra de 44% de reducción es un fraude. Excluye las llamadas "emisiones indirectas", o sea, las emisiones producidas con la

generación de la electricidad que usa la industria.

Un informe de 2005 incluye tanto las emisiones directas como las indirectas y llega a la conclusión de que las emisiones de gases de efecto invernadero del sector forestal de 2002 fueron iguales que en 1980. El informe, producido por el Consejo Canadiense de Ministros Forestales, señala que el sector forestal es el "mayor consumidor individual de energía de Canadá y tiene emisiones de gases de efecto invernadero significativas".

Los datos de otro informe más reciente indican que la situación podría ser incluso peor. Este informe fue encargado por la FPAC, lo que dio a la industria pocas excusas para ignorarlo. Escrito por el NCASI (el Consejo nacional para la mejora del aire y los cursos de agua), el informe compara las emisiones de 1990 con las de 2005. Distingue las emisiones directas (ocasionadas por la fabricación) de las indirectas (causadas por la generación de electricidad, las emisiones del transporte y el metano producido por los productos forestales en los vertederos). En 2005, según el NCASI, la industria forestal fue responsable de un total de 53,3 millones de equivalente de dióxido de carbono, en tanto en 1990 fueron 49,7 millones de toneladas, es decir que hubo un aumento de 7,2%.

Pero el informe del NCASI no se detiene ahí y presenta una contabilidad muy creativa en forma de "captura" y "emisiones evitadas", dando la impresión de que las cosas no están tan mal como parecen y que en cualquier caso pronto podrían mejorar. "Los datos disponibles demuestran que las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de la cadena de valor de la industria de los productos forestales se compensan ampliamente con la captura lograda en los productos forestales", escribe el NCASI. Las emisiones de metano generadas por la descomposición del papel y otros productos forestales en los vertederos son la mayor causa individual de los gases de efecto invernadero de la industria forestal canadiense y dan cuenta de alrededor del 46% de las emisiones de gases de efecto invernadero de 2005. Pero el NCASI nos tranquiliza al explicar que "las emisiones de metano en los vertederos atribuibles a los productos forestales canadienses son más que compensadas con el almacenamiento neto de carbono en los productos forestales depositados en vertederos". Algunos productos forestales depositados en vertederos se descomponen rápido y liberan metano, en tanto otros lo hacen con más lentitud, liberando el metano más lentamente. Esto, según el NCASI, es "captura".

Mientras tanto, las "emisiones evitadas" consisten en los cambios que la industria podría hacer, como producir más papel reciclado o usar formas combinadas de generación de calor y energía. El hecho de que la industria también podría evitar las emisiones produciendo menos papel no se menciona en el informe del NCASI. En su lugar, el NCASI anticipa un aumento del consumo de productos forestales.

En setiembre de 2007 la Confederación de Industrias Europeas del Papel (CEPI) publicó un "marco para determinar la cantidad de emisiones de carbono" (Carbon Footprint Framework). La CEPI no hace mucho aspaviento con eso de que la industria se vuelva "carbono-neutra". En su lugar, el documento presenta una serie de argumentos que las empresas pueden usar para convencer a los consumidores de que su producto es "carbono-neutro". No sorprende que los argumentos de la

CEPI sean similares a los de su contraparte canadiense. Por ejemplo, la CEPI propone que la industria debería alegar que el carbono se captura tanto en los bosques como en los productos del papel: "Afirmen que el Manejo Sustentable de Bosques asegura que las existencias de carbono en los bosques se mantengan estables o incluso mejoren con el tiempo, y elaboren sobre esta afirmación".

Parte de la razón por la cual está aumentando el consumo de papel es porque las empresas del papel aparecen continuamente con nuevos usos para el papel y promueven formas de usar más papel. Cuando esos productos del papel terminan en vertederos, se descomponen y producen metano. En lugar de intentar maquillar de verde sus actividades con argumentos espurios sobre la captura del carbono, la industria de la pulpa y el papel debería dejar de producir basura.

Por Chris Lang, <http://chrislang.org>

[inicio](#)

- Por qué las plantaciones como sumideros de carbono prácticamente no han sido instrumentadas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto... hasta ahora

En la percepción pública general los árboles se asocian automáticamente a beneficios ambientales y existe una demanda de consumo de proyectos "simpáticos" de compensación relacionados con los árboles en oposición al tipo de reducciones de emisiones industriales que han dominado el mercado del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Se calcula que cerca del 40% de los créditos de carbono generados en el mercado voluntario viene de proyectos relacionados con árboles.

Sin embargo, los proyectos forestales (y específicamente las plantaciones como sumideros de carbono) han estado en gran medida ausentes del mercado del carbono "certificado", es decir el MDL. Siguen representando una pequeñísima parte del programa de comercio del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto.

Como informara Jutta Kill en el boletín N° 119 del WRM, "en los tres años a partir de la adopción de las normas para los proyectos de forestación y reforestación y luego de doce rondas de presentaciones sobre metodología de base, solamente una plantación (en China) ha sido registrada como proyecto del MDL".

Buena noticia para las comunidades locales en lucha contra los monocultivos de árboles porque, de ser instrumentadas, las plantaciones como sumideros de carbono habrían sido legitimadas por el Protocolo de Kioto como supuesta "solución" al creciente problema del cambio climático y habrían aumentado más todavía la expansión de las destructivas plantaciones en el Sur mediante subsidios encaminados a través del mercado del carbono.

La idea detrás del concepto de sumideros de carbono es que las plantaciones de árboles, a través de la fotosíntesis, podrían "compensar" las emisiones de dióxido de

carbono (CO₂) al absorber dicho compuesto. Hace ya muchos años que Larry Lohmann (1) advirtió que "El problema consiste en cómo establecer una 'equivalencia' significativa y confiable entre el carbono secuestrado en forma permanente en depósitos de combustible fósil, el CO₂ transitorio en la atmósfera, y el carbono secuestrado temporariamente como resultado de cualquier tipo de plantación de árboles o de programas nacionales de forestación. Nadie tiene idea de cómo hacerlo. Y es poco probable que algún día se pueda lograr".

Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué las plantaciones de árboles no se adoptaron ampliamente como mecanismo de "compensación" siendo que tantos gobiernos estaban muy interesados en promocionarlas ofreciendo abundantes créditos de carbono baratos basados en el rápido crecimiento de los árboles en los países del Sur?

Una de las posibles explicaciones es que, mientras que el Protocolo de Kioto reconocía la forestación y la reforestación como actividades válidas para capturar emisiones y gases de efecto invernadero, establecía limitaciones a las compensaciones de las llamadas Actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (LULUCF): solamente se permitía el equivalente al 1% de las emisiones del año de base (1990) anual por país. Además, los créditos de tales proyectos de plantación de árboles son temporarios, circunstancia que los compradores perciben como riesgosa y compleja.

Además, las plantaciones como sumideros de carbono son riesgosas: pueden arder y liberar el carbono almacenado en los árboles, como ocurrió recientemente en Sudáfrica y Swazilandia (véase el boletín N° 123 del WRM). Al mismo tiempo, estas plantaciones enfrentan una cantidad de problemas legales relacionados con los títulos de propiedad, títulos de carbono, transferencia de derechos, contratos de administración e instrumentación y problemas metodológicos como falta de línea de base, definición poco clara de bosque, "filtraciones", etc. (2).

Más importante todavía, la oposición a las plantaciones a nivel local y el apoyo de las ONG en la esfera internacional ciertamente han tenido un impacto. Como declararon el economista Franck Lecocq y el funcionario Philippe Ambrosi del Banco Mundial en un informe de 2007 (3), "Los proyectos LULUCF en el MDL se enfrentaron a [...] las críticas de algunos interesados, sobre todo ONG ambientalistas. Según los críticos, los proyectos LULUCF serían ambientalmente negativos, inundarían el mercado de créditos de dudoso valor y llevarían a catástrofes ambientales en el Sur porque favorecerían las plantaciones industriales de árboles de crecimiento rápido de especies exóticas por sobre el manejo comunitario y sustentable de los bosques. Esta presión llevó a que en los Acuerdos de Marrakesh se estableciera una estricta limitación del alcance de los proyectos LULUCF en el marco del MDL".

Sin embargo, dos decisiones recientes pueden llegar a atraer más plantaciones al MDL. En primer lugar, se han eliminado las restricciones que exigían que los proyectos de plantación de árboles del MDL solamente podían ocurrir en tierra que no hubiera estado cubierta de bosques después de 1990. Esta restricción, adoptada en su origen para evitar que el MDL brindara un incentivo perverso a la tala de bosques para sustituirlos con monocultivos patrocinados por el MDL, fue eliminada

recientemente por la Junta Ejecutiva del MDL. Con este cambio, el MDL se volverá mucho más atractivo para las empresas y “superficies considerables de plantaciones en gran escala podrán aspirar a ser consideradas proyectos MDL” [véase el boletín N° 119 del WRM, <http://www.wrm.org.uy/boletin/119/opinion.html#MDL>]. El segundo cambio acaba de ser acordado en las conversaciones sobre el clima de Bali y consiste en aumentar el tamaño de los proyectos de plantación de árboles que pueden presentarse al MDL, con trámites simplificados y menos requisitos para la evaluación de los impactos sociales y ambientales. Una vez más esto será un nuevo incentivo para que las empresas de plantaciones intenten acceder al MDL.

Otro punto que vale la pena mencionar es que, mientras solamente un proyecto de plantación de árboles ha sido registrado como proyecto de forestación y reforestación del MDL, las empresas de plantaciones han descubierto otro camino que lleva al Mecanismo: como proyectos energéticos en lugar de sumideros de carbono. Un ejemplo es V&M do Brasil, cuyas plantaciones en el estado brasileño de Minas Gerais han seguido este camino y ahora se embolsan el dinero del MDL sin haberse identificado como proyectos de plantación de árboles. Ni siquiera el asesinato de un campesino por parte de los guardias de seguridad de V&M dentro de las plantaciones de la empresa fue suficiente para revocar el registro como proyecto del MDL [véase el boletín N° 119 del WRM en <http://www.wrm.org.uy/boletin/119/opinion.html#plantaciones>].

Hasta ahora las plantaciones como sumideros de carbono prácticamente no han sido instrumentadas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, pero las tendencias recientes podrían hacer cambiar las cosas, con lo que será necesario redoblar la conciencia y la resistencia.

(1) véase “El mercado del carbono: Sembrando más problemas” en <http://www.wrm.org.uy/plantaciones/material/carbono.html>

(2) véase “Markets for LULUCF Credits” en http://www.climatefocus.com/newspubs/downloads/publications/LULUCF_markets.pdf

(3) “The Clean Development Mechanism: History, Status, and Prospects” (<http://earthmind.net/labour/briefing/docs/reep-2007-cdm.pdf>)

Artículo basado en comentarios de Jutta Kill, FERN, correo-e: jutta@fern.org, Kevin Smith, Carbon Trade Watch, correo-e: kevin@carbontradewatch.org, y Larry Lohmann, The Corner House, correo-e: larrylohmann@qn.apc.org, y los documentos mencionados.

[inicio](#)

COMUNIDADES Y BOSQUES

- Criminalizados por Defender la Naturaleza

Recientemente, durante el mes de noviembre, se celebró en Quito la Cumbre de

Comunidades Criminalizadas por Defender la Naturaleza. La criminalización forma parte de una estrategia encaminada a acallar cualquier protesta en contra de las actividades extractivas de las transnacionales dentro de las fronteras del Ecuador. Pareciera que el próximo acusado puede ser cualquiera. Basta que eleve su voz en contra de la irracionalidad de la economía global.

La mayoría de los casos se están dando en las últimas áreas de bosque tropical que quedan en el país, que es donde se localizan también los recursos mineros y petroleros. En esta reunión se han analizado las circunstancias del número creciente de estos casos de criminalización injusta en las poblaciones indígenas y campesinas en las que está habiendo oposición a actividades empresariales extractivas, nacionales y transnacionales.

El encuentro de Quito quiso y logró ser un primer paso para “visibilizar frente a la opinión pública nacional e internacional la escalada de persecuciones políticas, jurídicas y para-judiciales a líderes sociales defensores de la naturaleza y la vida, frente a un modelo de desarrollo economicista, violador de derechos”, tal y como anunciaba la convocatoria a la Cumbre. En Ecuador, la criminalización a los campesinos se ha estado dando al Norte, en la zona subtropical de Intag y actualmente en el Sur del país, en la región amazónica.

Algunos de los rostros presentes en el evento parecen aliviados, seguramente al ver que no son los únicos que están pasando por eso. Policía, juzgados, investigaciones, indagaciones, sentencias, jueces, abogados, fiscales, doctores. Este mundo los sorprendió repentinamente a todos ellos. Algunos se han hecho ya expertos en leyes y procedimiento penal. No es raro, cuando una sola persona enfrenta diez, quince y hasta veinte juicios.

Es el caso de Tarquino Cajamarca, del cantón Limón Indanza en la provincia amazónica de Morona Santiago, perseguido por Sipetrol, gestora del proyecto Hidroabánico; de Rodrigo Aucay de El Pangui en la también amazónica Zamora Chinchipe, perseguido por la minera Corrientes Resource de la canadiense Ecuacorrientes; o de Polibio Pérez, de la zona subtropical de Intag, que ha sido perseguido también por la minera canadiense Ascendant Copper. En el evento se escuchan testimonios acerca de estos casos. El mayor delito de estos tres líderes comunitarios, respetados y reconocidos en sus zonas de origen, fue tal vez haber sido los que se opusieron más enérgicamente a las actividades de las transnacionales, aseguran los representantes de las organizaciones de derechos humanos. Desgraciadamente no son casos aislados.

Los costos de la defensa de estos y todos los campesinos acusados son enormes, tanto en términos económicos como en esfuerzo físico y psicológico. No sólo son los honorarios de los abogados lo que hay que pagar. Las distancias que los criminalizados tienen que recorrer hasta llegar a las audiencias son enormes. Muchos viven en parajes remotos, donde prácticamente no existía la delincuencia hasta la intervención de las transnacionales en sus zonas. Estas personas están siendo víctimas de un modelo de desarrollo totalmente ajeno a sus formas de vida y de entender el mundo. Algunos han pasado por la prisión, otros se han visto obligados a esconderse días o semanas para evitar la cárcel, viéndose alejados de sus familias y sus actividades cotidianas. Sobre Tarquino Cajamarca de Limón

Indanza pesa una orden de captura en estos momentos.

Es difícil la defensa. En muchos de estos casos, la acusación no es ejercida directamente por las transnacionales o personas abiertamente relacionadas con éstas, sino por personal pagado para dar falso testimonio y acusar a un líder campesino de un delito común, que éste no ha cometido. Durante algunos de los procesos, testimonios idénticos aportados por diferentes testigos evidenciaron que éstos estaban repitiendo un guión que se les había entregado previamente. La Comisión Ecuémica de Derechos Humanos CEDHU así como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, ambas con sede en Quito, poseen documentación completa sobre muchos de estos casos. Según un miembro de INREDH, los campesinos están siendo vinculados a listas negras. Se les roba material de trabajo como computadoras, como parte de una estrategia para inmovilizar a las organizaciones de reivindicación social. La Unidad de Investigación de la CEDHU reporta además numerosos casos de agresiones de personal de las empresas extractivas o de personal pagado por éstas, que incluyen amenazas de muerte, persecución, agresiones físicas, hostigamiento, calumnias y otras muchas.

Pero cada vez son más los acusados de algún delito común que no han cometido, lo que hace necesario y urgente que se tomen medidas. El número de líderes comunitarios y campesinos que están siendo criminalizados por empresas como respuesta a la resistencia que oponen algunas comunidades a sus actividades extractivas de petróleo, minería u otras en áreas de bosque tropical es alarmante. Según la Unidad de Investigación de la CEDHU, las acusaciones superan las 100, y los acusados son muchos más, teniendo en cuenta que gran parte de estas causas son múltiples, es decir, que acusan a más de una persona. Todos ellos saben muy bien porqué se oponen a estas actividades económicas: “¿A quiénes ha beneficiado 30 años de explotación petrolera? Las calles de los países del Norte están cada vez más embellecidas e iluminadas, mientras en Lago Agrio (ciudad petrolera en la Amazonía Ecuatoriana) siguen a oscuras, y peor aún, enfermos de cáncer y contaminados” dice Humberto Cholango, presidente de la Ecuarunari. Muchas poblaciones manifiestan que no quieren acabar en condiciones similares y por eso rechazan la extracción de los recursos naturales en sus zonas. Hay clara resistencia a la minería en Intag, Pacto, El Pangui, Napo, Machala y en otros lugares del país.

“Los pueblos somos paridos por la madre tierra y es por eso que hay que defenderla”, dice Cholango. “Pero mediante la no violencia”, especifica Esperanza Martínez, presidenta de Acción Ecológica, organización que también participó en este encuentro. “La no violencia es un arma mucho más poderosa y como defensores de la naturaleza no nos sale de otra forma”, añade. Esto a pesar de que entre los delitos de los que se acusa a los diferentes líderes y campesinos se encuentran el sabotaje y el terrorismo, los atentados contra la seguridad del Estado, la rebelión y atentados a funcionarios públicos, la apología del delito, la asociación ilícita, los delitos contra la propiedad como el robo y los delitos contra las personas como el plagio (secuestro). Con estos delitos comunes se intenta disfrazar los hechos de la resistencia popular y de paso, encarcelar para eliminar o neutralizar a las personas que ejercen mayor oposición a las actividades de las empresas en sus territorios. Para el trabajo sucio se contratan paramilitares o sicarios. Este caso ya se ha dado reiteradamente en Ecuador.

En la zona subtropical de Intag, cuatro de los 15 procesos iniciados por la compañía minera canadiense Ascendant Copper fueron concluidos con resoluciones absolutorias y favorables a las y los comuneros injustamente acusados. "La justicia nos dio la razón" dice Robinson Guachagmira, que expuso el caso de Intag durante el encuentro en Quito, "Yo mismo estuve ocho días en prisión, los peores días de mi vida, en los que me consolaba pensando que ojalá ese sacrificio contribuyera a que el medio ambiente y los bosques de mi zona permanezcan intactos para las futuras generaciones". Más de 90 personas de la zona noroccidental de Intag fueron sorprendidas con esta clase de denuncias arbitrarias.

Según el Dr. Raúl Moscoso, abogado comprometido con las causas sociales y presente en la Cumbre, "Los actos de resistencia de las comunidades son actos políticos". El doctor Moscoso construyó y sustentó la primera versión de la propuesta de Ley de Amnistía para este tipo de casos. La elaboración de este proyecto de Ley de Amnistía y la conformación de una Red Internacional de personas afectadas para evitar el enfrentamiento aislado e individual a las acusaciones, fueron algunas de las soluciones propuestas al gravísimo problema de la criminalización a campesinos, así como la propuesta de iniciativas de movilización conjunta. Mediante la propuesta de Ley de Amnistía, que el mismo día de la Cumbre se consiguió poner en manos de Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente así como ante la Fiscalía General de la Nación, se pretende proteger a personas que participen en actos de resistencia comunitaria en ejecución o por ejecutarse. Esta Amnistía general debería poder aplicarse a los casos individuales. También debería incluir la amnistía por responsabilidad civil.

Desgraciadamente, este fenómeno de la criminalización no es un hecho aislado ni exclusivo del Ecuador. En otros países de Latinoamérica se está dando en idénticas condiciones, asociado a otras industrias extractivas o al agronegocio, como es el caso del cultivo masivo de la soja en Paraguay, o de la palma africana en Colombia, donde las empresas hacen también un uso indiscriminado de la denuncia y la acusación contra la población campesina afrocolombiana, para acallar toda voz discordante que quiera impedir el desarrollo de la actividad económica empresarial en tierras comunitarias. También en relación con la minería se ha dado muy recientemente el caso de la criminalización de 7 indígenas Maya Mam en Guatemala. Idénticas noticias llegan desde este país: "A través de este juicio montado la empresa pretende debilitar el movimiento social anti-mina que está luchando por sus derechos en el municipio de San Miguel Ixtahuacan, mientras logra expandir su explotación en la región y desestructurar socialmente a las organizaciones que se oponen a la explotación minera", según Derechos en Acción de ese país.

ULTIMA HORA: El tema de la criminalización de la protesta social, ha tomado en los últimos días rabiosa actualidad en el Ecuador al encontrarse en estos momentos detenida la Prefecta de la provincia amazónica de Orellana, acusada de haber organizado la protesta social que culminó el 29 de noviembre en los lugares de Tiguino y Dayuma. Junto a ella están detenidas otras 22 personas. Criminalizadas. Sus reclamos: asfalto para una carretera, abastecimiento de agua y electricidad, y reparación de los daños ambientales y a la salud causados por la extracción petrolera. Por esto, la provincia se encuentra en estado de emergencia y se ha declarado el toque de queda. Por su parte, el presidente Correa, en diferentes actos

públicos, se refirió en la misma línea a la protesta social, calificando a los ecologistas de izquierdistas, románticos, infantiles y hasta terroristas, desconociendo el hecho de que la protesta procede de los pobladores y no de los "ecologistas". En el fondo de las iras del presidente se encuentra su intención de explotar a toda costa minas y petróleos, en una desesperada búsqueda de recursos, y a pesar de haberse presentado reiteradamente como "amigo de la población indígena", quienes en todo sentido serían los principales afectados. Al presidente parece no gustarle la resistencia social legítima que ha generado el balance de 30 años de explotación del petróleo de la Amazonía, donde la pobreza y el abandono persisten a pesar de todo lo prometido en su día por las petroleras.

Como conclusión podemos apuntar que se requiere la unión de líderes y campesinos afectados, a nivel nacional e internacional y una respuesta acorde al problema de la criminalización por parte de instituciones del Estado para evitar la persistencia de esta situación, así como la garantía de mecanismos –como la ley de Amnistía- que impidan a las transnacionales y al mismo Estado el hostigamiento de la población. Cualquier defensor del medio ambiente, de las selvas tropicales y los derechos humanos puede ser el próximo acusado de sabotaje, terrorismo, robo, secuestro, injurias, incendio, lesiones o asociación ilícita. Pero no olvidemos que de todas formas, defender los derechos sigue siendo una responsabilidad de todos.

Por Guadalupe Rodríguez, Campaigner Selvas Tropicales y Derechos Humanos, Salva la Selva, Latinoamérica, correo electrónico: guadalupe@regenwald.org, www.salvalaselva.org, www.activistas.nireblog.com

[inicio](#)

- India: instrumentación de la ley de 2006 de derechos de los indígenas sobre los bosques

El 7 de diciembre de 2007, el ministro indio de Asuntos Tribales prometió al Parlamento indio que la Ley de Reconocimiento de los Derechos sobre los Bosques (de Tribus Registradas) de 2006, aprobada hace un año por el Parlamento, sería notificada e instrumentada a partir del 1º de enero de 2008.

India tiene cerca de 90 millones de indígenas, en su mayoría Adivasi, que han vivido más que nada una vida sustentable al estilo indígena en el bosque y cuyos derechos podrían garantizarse con esta ley. En los últimos 60 años cerca de 30 millones de indígenas fueron desplazados de sus hogares y perdieron sus medios de vida debido a proyectos de "desarrollo".

La nueva ley reconoce por primera vez que los Adivasi y otras comunidades tradicionales de los bosques que no tienen documentos de propiedad anteriores de sus hogares o cultivos tienen derecho a vivir en el bosque al estilo indígena.

Pero la instrumentación de la Ley se ha retrasado meses. En su contra ha habido hasta avisos televisivos con niños que muestran pancartas que exigen el desplazamiento de los Adivasi, para proteger los bosques.

El primer ministro Manmohan Singh y la dirigente del partido con mayoría parlamentaria, Sonia Gandhi, están considerando ahora qué hará el país, si decidir que una enorme cantidad de habitantes indígenas de los bosques sean desplazados de sus hogares (en 600 reservas en los bosques) sin que quede claro cuáles son sus derechos o aclarar primero, en cumplimiento de la nueva ley, cuáles son sus derechos antes de definir si y cómo podrán desplazarse. Demarcar en 15 días los "hábitats críticos de vida silvestre" de 600 zonas de reserva sería violar los requisitos de cualquier debido proceso y podría llegar a significar el desplazamiento de millones de personas.

La Ley estipula el debido procedimiento legal para establecer cuáles son los hábitats críticos de vida silvestre de modo que el realojamiento fuera de los mismos pueda ocurrir solamente a través del consentimiento previo informado de las comunidades, con compensaciones acordadas mutuamente, basándose en sus derechos debidamente establecidos. También los compromisos internacionales de protección de la biodiversidad exigen un papel igualmente crucial para los indígenas y las comunidades locales y su participación en el uso sustentable y la conservación de la biodiversidad.

Todavía no está claro qué es lo que el gobierno indio decidirá ahora con relación a los posibles nuevos desalojos de las comunidades indígenas de los bosques. Por lo tanto, el programa de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, el WRM y muchas otras organizaciones ambientales apelaron el 13 de diciembre al primer ministro indio y a Sonia Gandhi, presidenta de la Coalición UPA, que está en el gobierno, para que garanticen la debida instrumentación de la Ley de derechos sobre los bosques.

El proceso para legalizar los derechos tradicionales y consuetudinarios de los Adivasi a la vida en el bosque, a tener su hogar en el bosque, a la recolección de productos del bosque y a la agricultura de subsistencia estará en todo caso lleno de luchas, pues la burocracia, varios grupos de elite y los grupos que ganan con las visitas turísticas a las reservas querrían mantener su control sobre el bosque. En varios estados de la India los movimientos y grupos por los derechos al bosque, unidos mediante la Campaña por la Supervivencia y la Dignidad, continúan las protestas contra los desalojos forzados y para que la Ley se instrumente debidamente.

Como dice la Ley, es necesario que se reconozcan los derechos de los habitantes indígenas del bosque para corregir la injusticia histórica que se les ha hecho. Esto es verdad no solamente en India sino en el mundo entero.

Por Ville-Veikko Hirvelä, correo-e: villeveikkoh@gmail.com

[inicio](#)

- Mekong: la Comisión internacional hace los controles equivocados

Recientemente han revivido las viejas propuestas de embalsar el río Mekong inferior. Según comunicados de prensa de la ONG tailandesa TERRA, los gobiernos de la República Popular de Laos, Camboya y Tailandia dieron permiso a empresas tailandesas, malayas y chinas para llevar a cabo estudios de factibilidad de hasta seis grandes represas hidroeléctricas en el Mekong inferior. Hace diez años estos proyectos se desestimaron por sus potenciales daños ambientales y elevadísimo costo.

La Comisión internacional del río Mekong tiene el deber de proteger este río. Según TERRA (véanse los comunicados de prensa –en inglés- en http://www.wrm.org.uy/countries/Thailand/MRC/Mekong_Mainstream_dams_media.pdf

y http://www.wrm.org.uy/countries/Thailand/MRC/Press_Release_12_Nov.pdf), “En virtud del Tratado del Mekong de 1995 el cometido de la Comisión es ‘hacer el máximo esfuerzo para evitar, minimizar y mitigar los efectos nocivos que pueda sufrir el medio ambiente... debido al desarrollo y uso de los recursos hídricos de la cuenca del río Mekong’ (artículo 7)”. Sin embargo, aunque en el sexto Simposio Técnico sobre las Pesquerías del Mekong de la Comisión del Río Mekong (2003) los investigadores concluyeron que “cualquier represa en el curso principal del Mekong... podría resultar desastrosa para las pesquerías”, la Comisión ha guardado un notorio silencio, sostiene TERRA, que opina que “Aunque el establecimiento de la Comisión fue celebrado como un paso adelante en la superación de viejos antagonismos en la región del Mekong, [la Comisión] sigue estando dominada por los intereses nacionales de sus Estados miembros, apuntalados por un criterio enfocado en los beneficios económicos que implica la exclusión de todo lo demás”.

Unas 175 organizaciones locales e internacionales, entre las que se cuenta el WRM, e instituciones donantes que hoy colaboran con la Comisión del Río Mekong firmaron una carta dirigida al director ejecutivo de la Secretaría de la Comisión para expresar su preocupación por el proyecto de construcción de seis represas hidroeléctricas en el Mekong inferior así como “el fracaso de la Comisión internacional del río Mekong para hacer respetar el Acuerdo del Mekong de 1995 en esta coyuntura crítica” (véase la carta completa en http://www.wrm.org.uy/countries/Thailand/MRC/Letter_%2012_November.pdf).

En lugar de responder a los graves asuntos planteados en la carta, la Comisión empezó a comprobar si las organizaciones firmantes eran verdaderas. Sin duda tiene derecho a hacerlo, pero por lo menos debería hacerlo bien.

El WRM recibió un mensaje de la Comisión, firmado por Lieven Geerinck, diciendo que “la Comisión del Río Mekong se toma muy en serio estas declaraciones” y que “la lista de organizaciones firmantes en el documento adjunto es bastante importante aunque encontramos algunas instituciones de menor pertinencia para el tema (por ejemplo, www.proyectogato.org). Creemos en la comunicación auténtica. ¿Podrían confirmar si su organización firmó la carta adjunta?” (véase el mensaje de la Comisión en http://www.wrm.org.uy/countries/Thailand/MRC/MRC_Message.html).

Parece que la Comisión cometió un gran error al asignar “menor pertinencia para el tema” al Proyecto Gato, organización en nombre de la cual firmó Jan Cappelle. Si se hubiera tomado la molestia de buscar en internet “Jan Cappelle” además de

“Proyecto Gato” no habría confundido a esta organización con una sociedad protectora de gatos y se hubiera enterado de su participación directa en el asunto de las represas en la región.

Pero ése no fue su único error. El comunicado y la información para la prensa fueron claramente elaborados por TERRA, una organización que trabaja en este asunto desde hace varios años, por lo que la Comisión debería haberles contestado a dicha organización en lugar de escribir a algunos signatarios para preguntarles si habían firmado o no o si eran “pertinentes para el tema”.

La Comisión debería actuar de acuerdo con su pretendida seriedad y responder a la demanda de brindar “algunas medidas de supervisión profesional y asesoramiento técnico de los proyectos de represa propuestos”, así como detalles sobre su “importante estrategia de coordinación de todos los tipos de proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Mekong para garantizar que se instrumente una solución sustentable o medidas alternativas”.

¿Qué ha hecho la Comisión para garantizar que las represas construidas en la región del Mekong a partir de 1995 no infringieran los derechos humanos básicos ni resultaran en la destrucción del medio ambiente? ¿Qué ha hecho para resolver los impactos de las represas en las que participó antes de 1995?

Las organizaciones civiles del río Mekong siguen esperando que la Comisión responda estas preguntas.

[inicio](#)

- La Ley sobre Bosques Comunitarios de Tailandia: ¿para quién piensa el gobierno militar que es buena?

La Asamblea Nacional Legislativa (NLA), establecida el año pasado en Tailandia después del golpe militar y que debería disolverse después de las elecciones generales del 23 de diciembre, aprobó, con su último aliento, la muy esperada Ley sobre Bosques Comunitarios. En lugar de consolidar los derechos constitucionales de todas las comunidades a manejar sus bosques de la forma que mejor les parezca, la Asamblea eligió excluir a las comunidades que viven fuera de las “zonas de conservación” del derecho de participar en el manejo de los bosques.

Contando a partir de la prohibición de las concesiones madereras, las comunidades en Tailandia tienen ahora 18 años de experiencia en manejo comunitario de bosques. La mayoría de los políticos e integrantes de la Asamblea niegan este hecho y siguen considerando a los aldeanos como destructores de los bosques. La información, las noticias y los análisis parciales creados a partir de un conocimiento superficial de los problemas han generado miedo y sospechas entre el público general en Tailandia. Esta perspectiva plantea solamente dos formas de resolver los problemas de la destrucción de los bosques. El primero es declarar zonas de conservación (artículo 3º) donde no se permite vivir a la gente. “Zonas de conservación” significa “Parque Nacional, Refugio para la Vida Silvestre, Zonas de

Caza Prohibida, reglamentadas por las respectivas leyes, u otras zonas que sean cuencas u otras zonas que tengan valor ambiental y cuya conservación se requiera según las reglamentaciones ministeriales". La segunda es aprobar leyes que otorgan un poder monopólico a los funcionarios estatales para imponer multas por la destrucción del bosque.

A pesar de estas perspectivas anticuadas, hoy las comunidades han aprendido de la crisis de los bosques degradados, que crearon graves problemas para su sustento en un contexto donde las comunidades agrícolas deben depender de la naturaleza. Las comunidades que participaron de la destrucción de los bosques en el pasado han vuelto a reunirse para preservar el bosque. Claro está que dichas comunidades solamente pueden manejar en forma efectiva los bosques si la sociedad reconoce su papel y si las comunidades pueden determinar sus propias opciones económicas, sociales y políticas. Sobre esta base serán capaces de manejar el bosque sirviéndose de mecanismos tanto formales como informales según la naturaleza de las zonas y las condiciones del grupo y de la comunidad. Varios grupos externos están promoviendo un proceso de aprendizaje que incluye aprender sobre los problemas a los que la comunidad se enfrenta, el aprendizaje mutuo entre las comunidades y también información y noticias de fuera de la comunidad.

Lo mejor para el manejo comunitario de los bosques no es el enfoque legal que pretende determinar los límites de varios tipos de bosque para que al Estado le sea más sencillo administrar, dividiendo las zonas de manejo según las responsabilidades de distintas unidades gubernamentales. Por el contrario, el manejo de los bosques comunitarios no hace distinciones estrictas entre zonas agrícolas, zonas residenciales y zonas de bosques ni separaciones estrictas en cuanto a la propiedad de tierras y bosques.

El manejo de los bosques comunitarios en Tailandia empezó con las comunidades dentro y fuera de los bosques conservados. Esto refleja una creciente conciencia de que el manejo efectivo de los bosques depende de un proceso de aprendizaje y fortalecimiento dentro de la comunidad. Las comunidades tienen la capacidad y la disposición de manejar los bosques dentro de unos límites evaluados junto con la comunidad según sus propias condiciones locales sociales, ambientales, económicas y políticas.

El concepto tras la redacción de la versión de la Ley sobre Bosques Comunitarios propuesta por el pueblo es resultado de haber aprendido de la silvicultura comunitaria en la práctica. El manejo comunitario del bosque merece apoyo para aumentar la superficie de bosques naturales en Tailandia en lugar de las plantaciones comerciales de árboles en las zonas de reservas forestales nacionales, y también para reforestar zonas de bosques degradados, tierras públicas y zonas de humedales que se están destruyendo a causa de diversos proyectos de desarrollo. Los bosques comunitarios deberían permitirse especialmente en las zonas de bosques conservados que corren cada día el riesgo de ser destruidos por el maderero ilícito en complicidad con funcionarios e individuos adinerados. Estas zonas han permanecido fuera de la vista de la ley, bajo las oscuras sombras de la corrupción de los funcionarios estatales que siempre esperan hacer su negocio. ¿Consideró la Asamblea el hecho de que las comunidades establecidas dentro y fuera de las zonas de conservación han tenido un papel importante en la protección

de los bosques cercanos y que muchos dirigentes comunitarios fueron asesinados por proteger el bosque en muchas zonas?

La expansión -- a manos del Estado-- de las zonas de conservación hacia los relictos de bosques en los que las comunidades encuentran su sustento se está dando precisamente en las zonas que han sido protegidas por las comunidades. En lugar de recompensar a estas comunidades demostrándoles confianza, el proyecto preliminar de la Ley de Bosques Comunitarios les ha cercenado sus derechos al manejo de los bosques comunitarios sobre la base de que están asentados fuera de la zona de conservación. El hecho de que las aldeas se encuentren fuera de la zona de conservación en prácticamente todos los casos es resultado de las negociaciones entre las comunidades y el Estado. La gente solicitó al gobierno que no incluyera sus aldeas y tierras de cultivo, establecidas hace mucho tiempo, en las zonas de conservación, aceptando al mismo tiempo que sus bosques comunitarios entraran en las zonas de conservación del gobierno. Esto se hizo con buena intención; la gente esperaba que sus bosques comunitarios fueran bien cuidados por la comunidad y el Estado en forma conjunta. Este asunto causó mucho sufrimiento a las comunidades, que luego de entregar sus bosques comunitarios a las "zonas de conservación" encontraron que el bosque se destruía aun más rápidamente. La comunidad era impotente para detener el madereo y al mismo tiempo no podía usar sus bosques.

Esta clausura del espacio social para el manejo de bosques por parte de las comunidades generó también conflictos más severos entre el Estado y las comunidades. Al final, la sociedad tailandesa y las comunidades solamente vieron un incremento de la destrucción del bosque por parte de los grupos inversionistas y funcionarios del gobierno que están a la espera de sacar su tajada del bosque. En el futuro, las comunidades deberán enfrentarse a la extrema pobreza por haber perdido acceso a los bosques de los que dependen. ¿Quién se hará responsable de esto después de que el gobierno militar envíe la ley sobre bosques comunitarios a los políticos, estos viejos muchachos que regresarán después de las elecciones de este fin de semana?

Por Sayamol Kaiyoorawong. La autora ha trabajado en apoyo del proyecto preliminar popular de la Ley de Bosques Comunitarios. Actualmente es directora de Environmental Awareness Building, en la provincia de Trang, Tailandia del Sur. Este artículo se publicó por primera vez en tailandés en Prachataam News Network, diciembre de 2007 (www.newspnn.com).

[inicio](#)

COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- Chile: lo que no se dice del trabajo forestal

El desarrollo forestal en Chile está marcado por una gran desigualdad en la distribución de la riqueza monetaria generada por esta industria. Las grandes utilidades que son subvencionadas por todos los chilenos y chilenas llevan a los

grupos económicos dueños de estas empresas a generar grandes riquezas que dejan a la población mirando como se menosprecian sus esfuerzos y recursos sin recibir a cambio beneficios reales de esta actividad.

Los daños económicos producidos por los desastres ambientales son asumidos por los afectados (en Río Mataquito, Río Cruces en Valdivia, por pérdida de agua en zonas netamente forestales, etc.). Por su lado, el Estado y la empresa hacen oídos sordos a los daños que provocan sus plantaciones de pinos y eucaliptos en comunidades aledañas, mayoritariamente mapuche.

Las condiciones del trabajo forestal, junto con sus trabajadores, se mantienen ocultos a la opinión pública e invisibles ante la comunidad, sin que puedan tener acceso a ellos los medios de comunicación, que podrían reflejar las múltiples dificultades que afrontan tanto en el terreno laboral como de salud física y psicológica. La diferencia de los trabajadores de otros sectores, como la minería al igual que los transportistas comerciantes, es que éstos tienen una capacidad de exposición y conocimiento de los problemas mayor porque generalmente se encuentran en zonas urbanas o pobladas y los medios de comunicación difunden estos asuntos mucho más seguido por su cercanía a la noticia. En cambio, el trabajo forestal generalmente transcurre en zonas alejadas y de difícil acceso y además restringidas por tratarse de predios forestales privados. A eso se suma la escasa capacidad organizativa de los trabajadores, por pertenecer a pequeños empresarios contratistas y sub contratistas.

La pérdida de acceso a los bienes naturales afectados por las plantaciones forestales, como el agua, que cada día se hace más escasa alrededor de las plantaciones, es motivo del éxodo de campesinos y mapuches pobres a las ciudades. Los recién llegados generalmente se suman a los cordones de pobreza y a los diferentes servicios de asistencia social.

Por otro lado, los daños millonarios de carreteras y puentes que provoca el tránsito pesado de la cantidad de camiones que acarrearán madera, recaen directamente sobre los pequeños productores hortícolas. Éstos, impedidos en esas circunstancias de llevar sus productos a los centros de consumo, muchas veces los terminan perdiendo. Resulta así que los costos no los asumen las empresas sino toda la población chilena que somos quienes aportamos los dineros para pagar las reparaciones de los pavimentos dañados.

Los sueldos de los trabajadores forestales se pagan por producción o rendimiento, medido en metros cúbicos. Suele ocurrir que se alteran las cifras, disminuyéndolas. Se trata de un mecanismo que utilizan algunas Emsefor (Empresas de Servicios Forestales) para manipular la información que dan a los trabajadores de los sueldos a pagar.

No hay una información cabal del total de accidentes laborales porque los accidentes menores (golpes, esguinces, heridas que no requieran una atención mayor) son frecuentes y se tratan fuera del sistema oficial, casi siempre en clínicas privadas o médicos particulares, sin informarlos. Con ello evitan aumentar los índices de accidentes laborales, lo cual aumenta los costos de los seguros.

El régimen de trabajo que mantiene a los jefes del hogar 12 días fuera de sus casas y luego les da 3 de descanso, no facilita una convivencia familiar saludable y altera el mantenimiento de hogares bien constituidos.

El contacto con plantaciones recién fumigadas con plaguicidas, herbicidas y funguicidas, entre otros, y la poca preocupación de la empresa por realizar regularmente exámenes de salud, no permiten que estos trabajadores reciban la debida información de los riegos a los cuales se exponen.

La prueba más clara de las repercusiones de este modelo de desarrollo está en los altos índices de pobreza y bajo desarrollo humano en las regiones mayoritariamente dedicadas al trabajo forestal, como son la octava región y la provincia de Malleco de la novena región en Chile.

Claro que el modelo forestal produce riqueza, y en abundancia, pero la pregunta es qué tipo de riqueza y cuánta de esa va en beneficio de los relacionados a su generación (trabajadores forestales como motoseristas, estroberos, despicadores, jefes de faenas, operadores, transportistas, mecánicos, etc.) y cuánta solo engrosa las arcas de grupos económicos inescrupulosos que se ven beneficiados de que todos los chilenos carguemos con los costos negativos de esta industria.

No cabe duda de que se generan más pobres que los que salen de esta calificación gracias al trabajo forestal. La excusa frecuentemente utilizada por los gobernantes y las empresas para promover el modelo forestal en las regiones más pobres de Chile es la creación de empleo y por lo tanto absorción de mano de obra. Sin embargo los hechos demuestran lo contrario ya que por causa de la industria forestal se han perdido empleos independientes, bien pagados, con trabajadores que se esfuerzan pero obtienen una recompensa suficiente y son libres, y además sin provocar grandes impactos en el medio ambiente, como los empleos que genera la pesca artesanal, el turismo y la agricultura. A cambio se han generado empleos mal pagados, esclavizantes, riesgosos, que además generan grandes impactos en el medio ambiente.

¿Qué tipo de empleos queremos? ¿Qué tipo de empleo quieren nuestros gobernantes? Al parecer a estos últimos no les importa mientras ellos conserven los suyos.

Por: Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), correo electrónico: radatemuko@googlegroups.com

[inicio](#)

- Chile: el nulo valor del sello CERTFOR en plantaciones de árboles

La mayoría de las plantaciones de las empresas forestales chilenas están certificadas, algunas por el FSC y la mayoría por CERTFOR (afiliado a PEFC). En números redondos, el FSC ha certificado unas 350.000 hectáreas, en tanto que CERTFOR lleva certificadas unas 1.600.000 hectáreas. Dada la importancia de

CERTFOR en Chile, interesa entonces analizarlo más en detalle.

Lo primero que llama la atención es el número total de hectáreas certificadas por CERTFOR, que equivalen a casi el 80% del total plantado en Chile. Es decir, que estas empresas certificadas son las principales responsables de la mayor parte de los problemas ambientales documentados en Chile vinculados a las plantaciones: destrucción de bosque nativo, degradación de recursos hídricos, tanto en cantidad como en calidad, impactos sobre los suelos, sobre la flora y sobre la fauna.

Al mismo tiempo esas plantaciones forestales han resultado en graves impactos sociales: ocupación de territorios mapuche, represión, criminalización, migración, pérdida de empleos, malas condiciones de trabajo, enfermedades vinculadas al uso de agrotóxicos.

Cabe señalar que encontrar información sobre estas empresas certificadas no fue una tarea sencilla. Eventualmente se logró hallar las grandes cifras de plantaciones expresadas en los párrafos siguientes, pero no fue posible encontrar los detalles de la ubicación y el tamaño de los distintos predios, ya que ninguna de estas empresas aporta ese tipo de información en sus páginas web.

Llama también la atención el hecho de que un solo grupo económico -el Grupo Arauco- posea más de un millón de hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto certificadas por Certfor. Bosques Arauco (289.000 hás), Forestal Celco y Forestal Cholguán (550.000 hás) y Forestal Valdivia (252.000) son todas empresas que forman parte de dicho grupo.

Por su parte, el otro gran grupo económico -el Grupo Matte, propietario de Forestal Mininco- posee entre 550.000-600.000 hectáreas certificadas por este mismo sello.

Aparte de los impactos sumados (un aspecto que parece no tener importancia para los certificadores) de esas plantaciones, estos dos grandes grupos tienen un largo historial -pasado y presente- de impactos sociales y ambientales negativos. En un artículo publicado recientemente en este boletín (Chile: las patas cortas de la mentira forestal - Boletín N° 120), resumimos muchos de esos impactos. Por ejemplo, allí se dijo que "en la época del año de mayor demanda de mano de obra, en la comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, sur de Chile, la forestal Mininco sólo da trabajo a 19 personas de la comuna, con salarios muy bajos Como ocurre en otras partes del país, sus enormes ganancias se traducen en pérdida de calidad de vida para los lugareños. El 33,8% de la población vive entre la pobreza y la indigencia."

Además, "La actividad agrícola descendió 22% en los últimos 10 años, forzando a poco más de 1.400 personas a emigrar a los pueblos ... Una de las razones es la falta de agua, ya que las plantaciones forestales han reseca los suelos. Cada verano la municipalidad debe distribuir agua en camiones para el consumo domiciliario."

"Pero además de la falta de agua está el problema de la contaminación con agrotóxicos. Los vecinos de los sectores rurales Porvenir Bajo y Porvenir Alto sufren graves problemas por las fumigaciones que efectúa la forestal Comaco. Los agrotóxicos, principalmente herbicidas (glifosato y simazina), son esparcidos en

forma mecánica o manual antes de plantar y en diversos momentos de la primera etapa de crecimiento de los árboles, contaminando ríos, esteros y acequias.”

También los trabajadores que logran acceder a un empleo en estas empresas certificadas se enfrentan a problemas. Una noticia publicada recientemente en la prensa (15/11/07) informa que “trabajadores forestales de la Provincia de Arauco, en Curanilahue, acusan a Forestal Arauco de intervencionismo en los sindicatos; de no cumplir sus compromisos y obligaciones; de empobrecer gravemente a la provincia”. Más grave aún, un movimiento iniciado en marzo en la zona de Arauco “que dio inicio a las negociaciones de trabajadores contratistas con los holdings forestales matrices (Bosques Arauco, Forestal Mininco) ... terminó con el saldo de un trabajador muerto”.

Estas empresas son también responsables de la criminalización de la oposición y de largas penas de prisión impuestas a los oponentes. La excepción ocurrió el 15 de junio de 2007, cuando por primera vez, una empresa forestal –Mininco- perdió un juicio interpuesto por un comunero mapuche, José Cariqueo. Sin embargo, cabe recordar que durante cinco años José Cariqueo tuvo que sufrir prisión y persecución por las falsas acusaciones de Mininco.

En definitiva, al otorgar a estas empresas su sello, CERTFOR se está otorgando a sí mismo otro sello: el de defunción.

Artículo elaborado en base a información de: Mapuexpress. Trabajadores Forestales denuncian a Empresa Arauco del Grupo Angelini, 15/11/07 <http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=2185> . Pehuén. Mapuche gana juicio a forestal Mininco, 15/6/07 <http://www.pehuen.org/mapuche-gana-juicio-forestal-mininco> . El Quinto Infierno. Amplia gama de actividades en Santiago y regiones por movilización de CUT <http://www.elquintoinfierno.cl/2007/08/28/amplia-gama-de-actividades-en-santiago-y-regiones-por-movilizacion-de-cut/>
Cifras de plantaciones certificadas, <http://www.pefc.org/> y <http://www.certfor.org/> inicio

- Papua New Guinea: Los isleños de Woodlark exigen que se detengan las plantaciones de palma aceitera

Las 85.000 hectáreas del territorio de la isla Woodlark, en la provincia de Milne Bay en Papúa Nueva Guinea, están casi completamente cubiertas por un denso bosque de tierras bajas --bosque seco en la parte oriental y selva tropical densa en la parte occidental-- que es hogar de varias especies endémicas. En la isla Woodlark hay especies únicas de ébano, entre ellas las variedades de ébano negro azabache, gris y pardo; este tipo de bosque es único en el mundo.

La mayor parte de los 6.000 habitantes de la isla dependen del medio ambiente natural disponible, así como de los recursos del mar, sus huertos (plantan principalmente ñame, taro [Colocasia esculenta], boniato y banana), la caza y la pesca, que tienen un papel menor, aunque importante, en su dieta.

Ahora la isla se enfrenta a la amenaza de ser tragada por un establecimiento de palma aceitera, que forma parte de un proyecto de la empresa malaya Vitroplant Ltd. El proyecto incluye también la construcción de una planta de metyl éster en Alotau, la capital de la provincia. Woodlark alimentará esta fábrica con los frutos de la palma aceitera de los extensos monocultivos de árboles que se convertirán en biodiésel para el consumo interno y la exportación.

Este establecimiento para la plantación de palma aceitera ocupará aproximadamente 60.000 hectáreas. La mayor parte del proyecto se desarrollará en tierras fiscales y el resto en forma de aldeas de palma aceitera, es decir palma aceitera en tierras consuetudinarias.

La empresa ha solicitado un Permiso Ambiental que todavía no ha obtenido. En la solicitud declararon que todos los requisitos necesarios habían sido cumplidos, incluidas las consultas con los propietarios de las tierras.

Sin embargo George Laume, de CELCOR INC, Amigos de la Tierra-PNG, recibió informes de personas de la isla relativos al proyecto de palma aceitera y sus conclusiones es que sigue habiendo falta de consulta y que las comunidades se oponen a esta iniciativa.

El mes pasado, Jeremy Hance declaró en su informe (1) que "según los isleños, nunca se los consultó en relación con los planes antes de que el gobierno otorgara la concesión a Vitroplant Ltd". El Dr. Simon Piyuwes es un médico nacido en la isla que se ha convertido en defensor de la lucha contra la plantación de palma aceitera. Hance menciona las "muchas razones" de Piyuwes "por las que los planes de Vitroplant Ltd. resultan inaceptables para los isleños. Declara que el madereo destruiría el ébano endémico de la isla, provocaría la extinción de varias especies y amenazaría la vida marina con los efluentes del proyecto. Anticipa no solamente una catástrofe ambiental sino también la desintegración de la cultura nativa, señalando que los planes de la empresa traerían consigo "una conducta socialmente inaceptable en la isla" y declara que todos los isleños terminarían amenazados de "morir de hambre" puesto que "no habrá espacio para la caza y los huertos". El Dr. Piyuwes admite que aunque pueda haber algunos beneficios económicos y de infraestructura cree que las desventajas superan por mucho a las ventajas".

Un proyecto presentado por sus promotores como crucial para el desarrollo de la isla se percibe por parte de mucha gente como una amenaza para Papúa New Guinea. Recientemente más de cien isleños y simpatizantes viajaron hasta la sede del gobierno provincial de Milne Bay, en la ciudad de Alotau, para exigir que se detenga el proyecto de palma aceitera y reclamar sus tierras.

Saben que el proyecto Vitroplant --que implica la tala de bosque-- hará que las aguas queden turbias, lo que a su vez implicará la muerte de los arrecifes de coral por falta de sol. Los arrecifes así como las zonas de pesca y de cría de peces (manglares) que proveen de alimento a la isla, se verán afectados. Se perderán las posibilidades de caza y recolección de alimentos del bosque. La gente de la isla Woodlark pasará a depender de alimentos importados y procesados y para sobrevivir no tendrá más remedio que trabajar en las plantaciones de palma

aceitera.

Se ha sugerido en el plan ambiental que el proyecto generará puestos de trabajo para otros ciudadanos de Papua Nueva Guinea. El trabajo en las plantaciones de palma aceitera es intensivo y la escasa población actual no podrá sostener por sí sola el peso de una plantación de esta escala, por lo que seguramente habrá que importar mano de obra para cubrir las necesidades laborales. Este país es uno de los países de mayor diversidad cultural del mundo, en el que se hablan más de 850 idiomas diferentes. Esto significa que hay muchas diferencias culturales dentro de distancias relativamente cortas. La introducción de grupos foráneos significará una enorme presión sobre las poblaciones locales.

El reclamo de suspensión de las plantaciones de palma aceitera surgido desde las bases podría cambiar el curso de los acontecimientos. A partir de la conciencia, la determinación y el impulso de los isleños de Woodlark, ese cambio puede lograrse.

Artículo basado en información brindada por George Laume, CELCOR INC. Amigos de la Tierra-PNG, correo-e: glaume@celcor.org.pg, www.celcor.org.pg, y (1) *Biofuels versus Native Rights: Planned logging of Woodlark Island for biofuels opposed by islanders and scientists*, Jeremy Hance, especial para mongabay.com, 12 de noviembre de 2007, http://news.mongabay.com/2007/1112-hance_woodlark.html

[inicio](#)

- Swazilandia: Woodmark y SAPPI ignoran las enseñanzas de un agricultor vecino

Peter George es agricultor. O, para ser más precisos, era agricultor. A mediados de la década de 1970 compró el establecimiento Elangeni Farm en los frescos campos altos ("alto veld") de Swazilandia. Cultivó verduras y algunos árboles: eucaliptos y acacias. Iba al mercado local dos veces por día para vender sus coles. Tenía unas cuantas ovejas, pollos, dos vacas y un perro pastor medio ciego. Después de unos años empezó con un pequeño criadero de peces que abastecía a restaurantes y hoteles locales. Se construyó su propia casa, se casó y formó una familia.

Cuando compró el campo, había mucha agua de los arroyos que corrían por las pendientes. A mediados de la década de 1980 la pastera Usutu Pulp Company empezó a plantar pinos en los cerros. George se vio obligado a dejar de cultivar cuando se secaron los arroyos de su campo. En 1988 la empresa sudafricana de la pulpa y el papel SAPPI pasó a ser accionista mayoritaria de la fábrica de celulosa de Usutu y las plantaciones asociadas. "Para 1990 no había casi agua para el cultivo de las verduras y muy poca para el consumo doméstico", explicó George. "Pero un día los arroyos no corrieron ni siquiera durante la estación lluviosa y para eso tenía que haber una buena razón", añadió.

En noviembre de 2007 formé parte de un equipo del WRM que visitó Swazilandia. Junto a colegas de Amigos de la Tierra, que estaban en Swazilandia para su reunión anual, visitamos la maloliente y contaminante planta de celulosa de Usutu,

perteneciente a SAPPI. El agua del arroyo que corre a su lado era color negro azabache a causa de los efluentes de la fábrica.

Peter George nos invitó a visitar su establecimiento al día siguiente. Cuando llegamos había trabajadores cortando eucaliptos plantados en sus tierras que se habían quemado este mismo año. Desde que los arroyos se secaron, el eucalipto es una de las pocas cosas que puede cultivar. Las plantaciones de SAPPI cercanas al campo de George estaban negras a causa del fuego. Este año SAPPI perdió alrededor del 7% de sus plantaciones en Swazilandia debido a los incendios.

Dimos algunas vueltas por el campo y George nos mostró los lugares donde Usutu Pulp Company había plantado pinos atravesando justamente los arroyos que habían abastecido de agua su establecimiento. SAPPI empezó a talar las plantaciones en 2002 y desde entonces los arroyos volvieron a correr, aunque a uno le llevó 18 meses recuperarse. SAPPI no ha vuelto a plantar hasta el borde de los arroyos pero tampoco ha mantenido las franjas de 30 metros a lo largo de ambas orillas que las reglamentaciones de Swazilandia exigen. En un lugar los árboles estaban a un poquito más de diez metros del arroyo.

George nos señaló unos restos de pared, todo lo que queda de una vivienda, hoy completamente rodeada por las filas de pinos de SAPPI. Los cerros "habían sido pasturas y tierras labrantías para la población local desde que podemos recordar", dijo.

George nos contó que en 1994 le escribió a SAPPI para quejarse de la falta de agua en su campo. Siete meses después SAPPI respondió prometiendo que investigarían el problema. SAPPI dijo que la investigación llevaría dos años. George sigue esperando los resultados de la investigación.

En 2004 George ya había empezado una demanda legal contra SAPPI. No solamente su tierra se secó: "Los arroyos de otras personas se habían secado y no siempre tenía la culpa la sequía", señaló.

En junio de 2006, Soil Association's Woodmark certificó las plantaciones de Swazilandia de SAPPI como bien manejadas en virtud del sistema del Consejo de Manejo Forestal (FSC, en inglés). En marzo de 2006 Peter George se reunió con el equipo asesor de Woodmark. El resumen público de Woodmark reconoce que la reunión tuvo lugar pero brinda pocos detalles. El resumen público menciona que los arroyos se secaron pero añade que ahora "han vuelto a la normalidad". No hace mención al hecho de que durante 12 años prácticamente no hubo agua en el campo. "El asunto relativo a la reducción del caudal del agua a causa de la plantación de los árboles y la subsiguiente demanda es 'sub judice' y por lo tanto está [sic] bajo consideración judicial", comentaron los asesores de Woodmark en el resumen público.

Según la norma británica sub judice (expresión latina que significa "pendiente de una decisión judicial"), la discusión pública de casos penales actuales o futuros puede constituir un delito. El objetivo de la norma es proteger el derecho de los acusados a un juicio justo, pero en este caso Woodmark se esconde tras la norma sub judice para impedir un debate legítimo.

Woodmark parece querer que Peter George simplemente se vaya. Cuando los asesores de Woodmark volvieron a visitar Swazilandia en 2007 para su auditoría anual de las plantaciones de SAPPI, no lo invitaron a su reunión de partes interesadas ni visitaron su campo.

En agosto de 2007 George le escribió a Woodmark señalando que "SAPPI no tiene permisos de plantación para las parcelas en cuestión ni los solicitaron". George tiene una carta de SAPPI que declara que la empresa no tiene permiso de plantación para determinada parcela, que es la tierra más arriba de Elangeni Farm. En su carta a Woodmark, George añade: "En mi opinión, SAPPI no debería recibir la certificación hasta que se arregle este asunto. Si dicha certificación se otorgó, tomaré medidas para impugnarla". Woodmark no ha respondido las cartas de George.

Los problemas que enfrenta Peter George en su campo de Swazilandia no son exclusivos. El WRM ha informado de muchos ejemplos en países del Sur de arroyos y fuentes de agua que se secan después de que se establecen plantaciones industriales de árboles. En lugar de ignorar a Peter George, los "peritos" de Woodmark deberían tener la humildad de darse cuenta que tienen mucho que aprender de él.

Por Chris Lang, <http://chrislang.org>

[inicio](#)

- Unión Europea y agrocombustibles: la insostenibilidad de lo "sostenible"

Los políticos europeos junto a otras instancias quieren justificar la acelerada introducción de los agrocombustibles en los países de la Unión Europea estableciendo criterios de supuesta sostenibilidad. Sin embargo, antes de realizar evaluaciones completas, de consultar a las poblaciones afectadas y de establecer estos criterios, los objetivos o porcentajes obligatorios de agrocombustibles con los que deben ser mezclados los combustibles fósiles ya están fijados de antemano. Los porcentajes son tan altos (5,75% hasta 2010 y 10% hasta 2020) que son muchos los análisis que anuncian que son imposibles de alcanzar.

Se intenta presentar una actividad meramente comercial como la solución a problemas ambientales y de cambio climático. Se crean problemas sociales irreparables en poblaciones extremadamente vulnerables de los países productores del Sur. Las plantaciones de palma, sojales, cañaverales y otros cultivos siguen extendiéndose a costa de bosques tropicales y otros ecosistemas fundamentales, despojando a la población local indígena, afrolatinoamericana y campesina de sus tierras y modos de vida.

Por otra parte, la sustentabilidad económica de algunas industrias parece depender de la continua amenaza a la estabilidad del clima y del planeta. Actualmente, los impactos ambientales y sociales de la producción de materia prima para agrocombustibles en los países del Sur, como respuesta a la demanda procedente

de los países del Norte, tienen connotaciones que preocupan seriamente a las comunidades y organizaciones sociales y ambientales. No sólo por lo que ya está aconteciendo sino por la posibilidad de que todo ello se multiplique exponencialmente y sin vuelta atrás. Los precios de la tierra y de los alimentos experimentan importantes subidas. Para la producción de los agrocombustibles se deforestan bosques tropicales, afectando su biodiversidad y el modo de vida de personas que habitan estos ecosistemas, y además se necesitan grandes dosis de agroquímicos que contaminan a la población, los suelos y las aguas.

La Unión Europea está incluyendo en sus normativas la condición de "sostenibilidad" de la materia prima para agrocombustibles importados de los países del Sur. No obstante, no cuenta actualmente con ningún sistema que garantice el cumplimiento de estándares sociales y ambientales. Es más, ningún sello de certificación social y ambiental aplicados en la actualidad en otros ámbitos similares arroja los resultados inicialmente deseados. Las iniciativas que se encuentran en marcha para certificar la "sostenibilidad" de los agrocombustibles tienen una participación predominante de gobiernos y otras instituciones de los países del primer mundo, de las empresas y de organizaciones que favorecen sus intereses, pero no toman en cuenta los impactos actuales ni las preocupaciones de las organizaciones sociales del Sur, ni a las poblaciones potencialmente afectadas. Se trata de puro "lavado verde".

Todo lo referido hace preguntarse lo siguiente: ¿de qué sostenibilidad se está hablando?

Si son las naciones industrializadas las que desarrollan los esquemas de sustentabilidad, sin intervención de los países productores, no se reflejarán las realidades ni las prioridades socioambientales de éstos. Es más, en muchos casos estas prioridades no están claras ni siquiera al interior de los propios países productores, cuyas políticas están en la mayoría de los casos altamente influenciadas por transnacionales y políticas de apoyo a éstas, como las del Banco Mundial, el BID, los organismos de cooperación internacional, etc. Por estas causas son los pequeños productores, la población local, la más pobre, quien corre el riesgo de pagar todos los costos, como ya está sucediendo en la actualidad.

Los países del Norte tienen la obligación de considerar los impactos que tienen sus políticas de comercio de agrocombustibles en otras partes del mundo, concretamente en los países del Sur. Pero nadie quiere renunciar a nada: las empresas no quieren renunciar a un negocio en expansión que promete beneficios extraordinarios; las agendas de los gobiernos parecen estar dominadas por las empresas que son las beneficiarias y potenciales beneficiarias de este negocio multimillonario y sucesor de la industria petrolera, por lo menos por la ligereza con la que se establecen leyes y normativas (eso sí, las fronteras europeas bien cerradas, y cada vez más cerradas, no vaya a ser que los innumerables desplazados del Sur Global puedan querer entrar "en casa"); los consumidores no quieren renunciar a un nivel de vida que implica un gasto energético desmedido en su vida diaria, lo que incluye el transporte individual, responsable de 20 % de las emisiones globales de CO₂.

Nadie parece estarse planteando políticas serias y realmente efectivas de ahorro energético, de disminución de los niveles desmedidos y exagerados de consumo actual. Es significativo el hecho de que cualquiera de los países de Latinoamérica,

en los que se proyecta una gran parte de la producción de las commodities para agrocombustibles, tiene niveles significativamente más bajos de emisiones de CO2.

Para esclarecer todas estas contradicciones, más de 190 organizaciones de Norte y Sur están pidiendo una moratoria de 5 años para los agrocombustibles (el texto de la moratoria está disponible en varios idiomas. Texto y adhesiones a través de www.econexus.info). Recientemente, el relator especial de la ONU para la seguridad alimentaria, Jean Ziegler, también aludió en su informe a la necesidad de una moratoria.

Actualmente no existe una definición común internacionalmente aceptada y consensuada de "agrocombustible sostenible". Entonces, políticos, ciudadanos de la Comunidad Europea, seamos honestos: ¿De qué hablan cuando hablan de la sostenibilidad para la producción de agrocombustibles? ¿De que las compañías productoras tengan asegurado para siempre el abastecimiento de materia prima para la producción de combustibles como agro-diesel y del agro-etanol? ¿De sostener un modo de vida ostentoso y derrochador? Tal vez sería más justo y humano preocuparse de que los indígenas y campesinos del Sur Global tengan asegurada para siempre su medio ambiente, en especial las últimas selvas tropicales, su soberanía alimentaria y su forma de vida.

Extraído y adaptado del artículo de Guadalupe Rodríguez al cual puede accederse en:

http://www.wrm.org.uy/temas/Biocombustibles/Union_Europea_agrocombustibles.html, Guadalupe Rodríguez, Campaigner Selvas Tropicales y Derechos Humanos, Salva la Selva, Latinoamérica, correo electrónico: Guadalupe@regenwald.org, www.salvalaselva.org

[inicio](#)

Boletín Mensual del Movimiento Mundial por los Bosques
Este boletín también está disponible en inglés, francés y portugués
Editor: Ricardo Carrere

Movimiento Mundial por los Bosques
Maldonado 1858 - 11200 Montevideo - Uruguay
tel: 598 2 413 2989 / fax: 598 2 410 0985
wrm@wrm.org.uy - <http://www.wrm.org.uy>

